

Una aproximación al neoextractivismo en Colombia

CAROLINA ARIAS HURTADO*



El neoextractivismo, como modelo de acumulación basado en la sobreexplotación de la naturaleza y el despojo territorial, ha sido designado como la principal *locomotora* de desarrollo en Colombia que opera a través de megaproyectos orientados a la explotación de minerales, biomasa y energía. Conflictos ecológicos, culturales, sociales, económicos y políticos revelan las múltiples contradicciones de este modelo; al tiempo que se fortalecen las resistencias sociales por la defensa del territorio, la naturaleza y la cultura.

Neoextractivismo en el siglo XXI

Los programas de ajuste estructural acaecidos a finales del siglo XX determinaron el papel de América Latina en el nuevo orden mundial¹ como proveedor de materias primas y fuerza de trabajo barata, a la vez que impulsaron la expansión geográfica de la industria maquiladora. En el marco del Consenso y el Post-consenso de Washington se reestructuraron

las economías de la región desde los preceptos neoliberales (privatización, libre comercio y desregulación) y se redefinió el papel del Estado para facilitar el desarrollo guiado por el mercado, es decir, por las inversiones privadas y extranjeras en el sector primario mediante el neoextractivismo.

Aunque el extractivismo ha estado presente a lo largo de las grandes etapas del desarrollo capitalista, en la actualidad ha cobrado una fuerza inusitada al operar a través de megaproyectos, en economías de enclave, con escasos encadenamientos locales o nacionales, muy dependientes de inversiones extranjeras y

* Estudiante,
Doctorado en
Estudios del
Desarrollo,
Universidad
Autónoma de
Zacatecas

¹ James Petras, «Globalización, imperialismo y desarrollo», en Henry Veltmeyer (coord.), *Herramientas para el cambio: manual para los estudios críticos del desarrollo*, La Paz, Plural Editores, 2010.

supeditados a cadenas de comercialización global.² Nos encontramos así ante una «transición histórica de un periodo de globalización neoliberal a una nueva era con fundamento en la dinámica de la política del nuevo extractivismo».³

En América Latina, el neoextractivismo incluye megaproyectos orientados a la explotación de minerales (metálicos, fósiles, industriales, materiales de construcción), biomasa (cultivos, plantaciones, pesca)⁴ y fuentes de agua para la irrigación de cultivos, procesos industriales y generación de energía (grandes represas hidroeléctricas). Estos proyectos se desarrollan en el marco de los planes de integración Mesoamérica y la Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Sudamericana (IIRSA), los cuales contemplan la construcción de complejos sistemas de infraestructura en materia de comunicaciones, transporte (hidrovías, puertos, corredores biocénicos) y energía.

Un aspecto sobresaliente del neoextractivismo es su presencia en los distintos regímenes del continente, desde los países más apegados al modelo neoliberal (México y Colombia) hasta los países «posneoliberales» (Bolivia y Ecuador).⁵ En ese sentido, este modelo puede ser visto como expresión de las alianzas de clase entre los agentes dominantes de los países centrales y de la región para reactivar el proceso de acumula-

ción del capital.⁶ Se impone con marcos regulatorios extremadamente favorables, privatización de los medios de producción y las empresas del Estado, promoción de la inversión directa transnacional,⁷ flexibilizaciones en los controles sociales y ambientales, entre otras medidas divulgadas por instituciones financieras y agencias internacionales.

El Atlas de Justicia Ambiental⁸ ha identificado 338 conflictos socioambientales causados por el neoextractivismo en 11 países de América Latina (gráfica 1). Dichos conflictos se relacionan con la exploración y la explotación de metales preciosos, minerales y materiales de construcción, las actividades agroindustriales, el control de las tierras y la explotación de hidrocarburos. Las comunidades indígenas se encuentran involucradas en la mitad de los conflictos, asimismo, de los países analizados Colombia registra el mayor número (88 casos).

Neoextractivismo y conflictos territoriales en Colombia

Los planes nacionales y las políticas sectoriales de las dos últimas décadas han trabajado por consolidar el crecimiento de la agroindustria, la megaminería y los grandes proyectos energéticos como las principales *locomotoras de desarrollo*.⁹ Para tal efecto han establecido las condiciones legales, financieras e institucionales necesarias para promover la inversión extranjera directa. En ese esquema, las empresas privadas y extranjeras constituyen los únicos agentes con alto potencial para impulsar el crecimiento

² Eduardo Gudynas, «Debates sobre el desarrollo y sus alternativas en América Latina: una breve guía heterodoxa», en Miriam Lang y Eduardo Mokrani (coords.), *Más allá del desarrollo*, Quito, Fundación Rosa Luxemburgo, 2011.

³ Eduardo Gudynas, «Diez tesis urgentes sobre el nuevo extractivismo. Contextos y demandas bajo el progresismo sudamericano actual», en Centro Andino de Acción Popular (CAAP) y Centro Latinoamericano de Ecología Social (CLAES) (coords.), *Extractivismo, política y sociedad*, Quito, CAAP y CLAES, 2009. Citado por Henry Veltmeyer, «Economía política de la extracción de recursos naturales: ¿nuevo modelo de desarrollo o imperialismo extractivo?», *Estudios Críticos del Desarrollo*, vol. 3, núm. 4, pp. 9-43.

⁴ Joan Martínez Alier y Mariana Walter, «Social metabolism and conflicts over extractivism», en Fabio de Castro, Barbara Hogenboom y Michael Baud, *Environmental governance in Latin America*, London, Palgrave Macmillan, 2016, 58-85.

⁵ Henry Veltmeyer, «Economía política...».

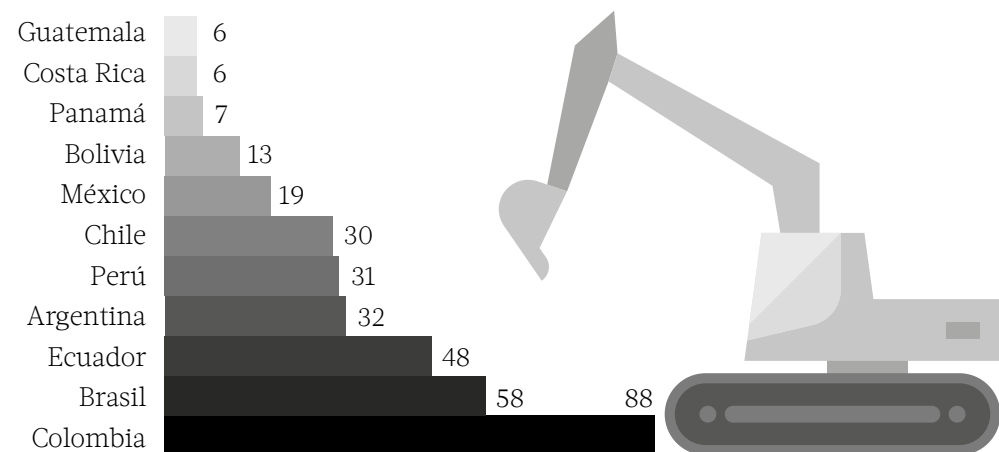
⁶ David Harvey, *El nuevo imperialismo*, Madrid, Akal, 2004.

⁷ Henry Veltmeyer, «Una sinopsis de la idea de desarrollo», en Humberto Márquez Covarrubias, Roberto Soto Esquivel y Edgar Záyago Lau (coords.), *Visiones del desarrollo*, Zacatecas, Universidad Autónoma de Zacatecas/Miguel Ángel Porrúa, 2012, pp. 15-44.

⁸ Environmental Justice Organisations, Liabilities and Trade (EJOLT), «Environmental Justice Atlas», 2016, en <https://ejatlas.org/>

⁹ Álvaro Ponce, *¿Cuál locomotora? El desalentador panorama de la minería en Colombia*, Bogotá, Debate, 2012.

Gráfica 1. Conflictos socioambientales por el neoextractivismo en América Latina (2016)



Fuente: elaboración propia con datos de Environmental Justice Organisations, Liabilities and Trade, *op. cit.*

económico del país; atraen inversiones mediante la ausencia de impuestos, las garantías tributarias, la posibilidad de explotar mano de obra barata y externalizar impactos ecológicos, culturales y sociales.¹⁰

En Colombia, la inversión extranjera directa orientada a megaproyectos mineros y de hidrocarburos aumentó de 21 por ciento a 85 por ciento entre los años 2000 y 2010.¹¹ Por su parte, la inversión extranjera en proyectos de agroindustria, agricultura, silvicultura y pesca creció 241 por ciento entre 2010 y 2014.¹²

Además de los impactos sociales y naturales, el modelo ha tenido efectos económicos, políticos y culturales; el control por el territorio y sus riquezas naturales ha sido la causa del conflicto y la guerra más larga del continente. Resalta también que la negociación de los acuerdos de paz se halla exenta de cuestionamientos sustantivos al modelo económico. Por tanto, el neoextracti-

vismo se presenta como fuente de financiación para el «posconflicto».

De los 88 conflictos socioambientales en Colombia identificados por el Atlas de Justicia Ambiental y relacionados con las diversas formas del neoextractivismo (gráfica 2), más de la mitad involucran a corporaciones multinacionales.¹³ Aunque los conflictos están presentes en todas las regiones, se ubican principalmente en las zonas más pobladas (Andina y Caribe), así como en zonas de conservación y territorios ancestrales. Cerca de 7.9 millones de personas han sido afectadas, en particular las comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes.¹⁴

Respecto a las relaciones económicas el escenario es menos favorable. Se acentúa cada vez más el carácter dependiente y el proceso de reprimarización. En los últimos años el valor de las exportaciones apenas comprende la cuarta parte del costo de las importaciones. Adicionalmente, más de la mitad de los megaproyectos extractivos en el país se encuentran en manos de inversión extranjera directa asociada con altos

¹⁰ Carolina Arias Hurtado, «Conflictos territoriales y patrimoniales en «el pesebre de oro de Colombia»», *Luna Azul*, núm. 39, 2014, pp. 207-233.

¹¹ Catalina Toro Pérez, «Geopolítica energética: minería, territorio y resistencias sociales», en Catalina Toro Pérez, Julio Fierro Morales, Sergio Coronado Delgado y Tatiana Roa Avendaño, *Minería, territorio y conflicto en Colombia*, Bogotá, Universidad Nacional de Colombia, 2012.

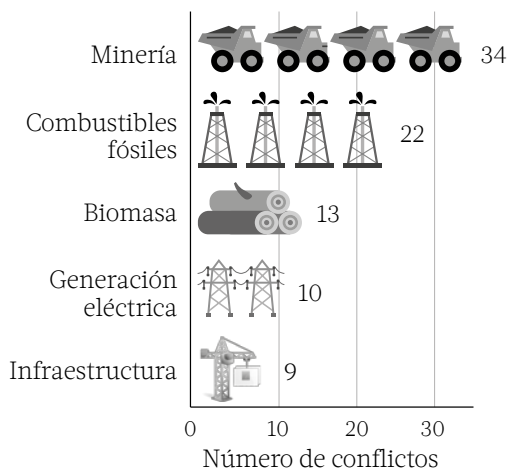
¹² Paula Delgado Gómez, «La inversión extranjera en el sector agropecuario creció 241% desde 2010», *La República*, 6 de julio de 2015.

¹³ Mario Alejandro Pérez Rincón, «Conflictos ambientales en Colombia: actores generadores y mecanismos de resistencia comunitaria», *Ecología Política*, núm. 48, 2015.

¹⁴ Mario Alejandro Pérez Rincón, Luis Darío Sánchez y María del Carmen Zúñiga de Cardoso, *Conflicto ambiental en el Río Pance entre diversos usos y usuarios del agua* (Colección Libros de investigación), Cali, Universidad del Valle, 2014.

valores de transferencias de rentas. En 2013 se transfirieron por rentas 7.8 por ciento más que en 2000,¹⁵ ya que los impuestos sobre la producción de *commodities* son simbólicos o por completo inexistentes.¹⁶

Gráfica 2. Conflictos socioambientales por el neoextractivismo en Colombia (2015)



Fuente: elaboración propia con datos de Mario Alejandro Pérez Rincón, «Conflictos ambientales...»

En Colombia dicho modelo afecta los territorios y la identidad cultural de comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas; representa en muchos casos la pérdida del control sobre el uso de la tierra, la soberanía alimentaria y las redes de comercio locales; afecta ecosistemas estratégicos como páramos, selvas, bosques andinos, ríos y humedales;¹⁷ causa desplazamientos forzados, amenazas y desapariciones

¹⁵ Pablo Samaniego, María Cristina Vallejo y Joan Martínez Alier, en *Déficit comercial y déficit físico en Sudamérica*, Quito, Universidad Autónoma de Barcelona/Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales sede Ecuador, 2014.

¹⁶ James Martín Cypher, «Neoextraccionismo y primarización: términos de intercambio en América del Sur», en Alicia Girón, *Democracia, financiarización y neoextraccionismo ante los desafíos de la industrialización y el mercado de trabajo* (Colección de libros Problemas del desarrollo), México, Universidad Nacional Autónoma de México-Instituto de Investigaciones Económicas, 2014, pp. 117-41.

¹⁷ Defensoría del Pueblo, *La minería de hecho en Colombia*, Bogotá, Defensoría del Pueblo, 2010.

de líderes, así como actos sistemáticos y generalizados tendientes a generar procesos de terror y ruptura del tejido social.¹⁸ Aunado a ello, es responsable de la intensificación de los procesos de militarización articulados con acciones paramilitares.¹⁹

Neoextractivismo y resistencias sociales en Colombia

Sin embargo, durante los últimos años las comunidades locales afectadas por el neoextractivismo han cuestionado su legitimidad y el funcionamiento en apariencia normal y natural de sus efectos sobre la sociedad y la naturaleza.²⁰ Las comunidades privilegian el valor de uso de sus territorios por encima del valor de cambio, pues la reproducción social de la vida no está puesta en función de las ganancias sino de la vida misma.²¹

Con el apoyo de varios sectores sociales las comunidades afectadas han conformando un movimiento social heterogéneo. Para el periodo 2001-2011 se registraron en Colombia 274 acciones sociales colectivas (marchas, reclamos, paros cívicos, bloqueos de vías y huelgas de hambre) en contra del neoextractivismo, con un ascenso desde el año 2005 y un crecimiento sostenido a partir de 2008.

En esas acciones participaron sectores diversos: campesinos, indígenas y afrocolombianos; mineros tradicionales (trabajadores independientes); trabajadores vinculados a las empresas

¹⁸ Francisco Ramírez, «Tierra y minería, el conflicto en Colombia», *Revista Semillas*, núms. 32-33, 2007.

¹⁹ Andrés Idárraga Franco, Diego Andrés Muñoz Casallas e Hildebrando Vélez Galeano, *Conflictos socio-ambientales por la extracción minera en Colombia: casos de la inversión británica*, Bogotá, Censat Agua Viva, 2010.

²⁰ Arturo Escobar, Sonia Álvarez y Evelina Dagnino, *Política cultural & cultura política: una nueva mirada sobre los movimientos sociales latinoamericanos*, Bogotá, Taurus, 2001.

²¹ Claudia Composto y Mina Navarro (eds.), *Territorios en disputa. Despojo capitalista, luchas en defensa de los bienes comunes naturales y alternativas emancipatorias para América Latina*, México, Bajo Tierra Ediciones, 2014.

extractivas (asalariados); pobladores urbanos, activistas, académicos e investigadores. Entre los motivos primordiales de las acciones se encuentran las violaciones a los derechos de comunidades indígenas y afrodescendientes, la protección del medio ambiente, el incumplimiento de acuerdos entre las empresas y sus empleados, al igual que pliegos laborales.²²

También se ha logrado la articulación de los movimientos sociales en los ámbitos local y nacional con movimientos internacionales de justicia socioambiental, como el Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP), el Movimiento Mundial por los Bosques (WRM), la Alianza de Organizaciones Católicas para el Desarrollo (CIDSE), el Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina (OCMAL), Colombia Support Network (CSN), entre otras organizaciones. De esa manera, las luchas locales alcanzan mayores respaldos globales y se fortalecen entre sí a través de la construcción de redes de solidaridad con otras comunidades afectadas por el neoextractivismo.

En cuanto a lo jurídico, se han interpuesto derechos de petición, acciones de tutela, acciones de grupo, acciones de reparación directa, denuncias penales y presentación de casos ante tribunales internacionales, como el TPP y la Comisión Interamericana, que incluyen el aporte de pruebas en torno a la violación de derechos humanos y la destrucción de los territorios.²³

Debido a la presión social, algunas instituciones parecen obrar como la «mano izquierda del Estado»,²⁴ asumir un papel partidario de la



defensa de los derechos sociales. Tal es el caso de la Contraloría General de la República que ha denunciado los impactos lesivos del neoextractivismo sobre los derechos humanos, el ambiente y la economía, y de la Corte Constitucional que ha exigido al Estado la protección de los ecosistemas frágiles y de los derechos fundamentales a la consulta previa, al territorio y a la diversidad étnica y cultural de las comunidades indígenas y afrodescendientes frente a actividades extractivas. Dichas instituciones han legitimado sus actuaciones en las contribuciones realizadas por académicos e investigadores de esta problemática. De ahí que se ha generado una alianza con las clases populares que busca reconstruir el sentido público del Estado, de manera antagónica a las clases dominantes.

Casos emblemáticos son las acciones legales por medio de las cuales algunas comunidades han detenido los megaproyectos extractivos en sus territorios:

✦ En 2010, mediante una acción de tutela, tres resguardos indígenas y dos territorios colectivos de afrodescendientes del municipio de Carmen de Darién (Chocó) lograron que la Corte Constitucional suspendiera el megaproyecto minero Mandé Norte de la Muriel Mining Corporation y Río Tinto.

✦ Gracias a la primera consulta popular sobre proyectos extractivos en Colombia,

Resistencia social frente al neoextractivismo en Colombia.
Fotografía: Carolina Arias Hurtado

²² Centro de Investigación y Educación Popular (CINEP), «Minería, conflictos sociales y violación de derechos humanos en Colombia», Bogotá, CINEP, 2012.

²³ Carolina Arias Hurtado, «¿Neoextractivismo o desarrollo local? Conflictos territoriales y culturales», en Línea de Investigación en Estudios Socioculturales y Problemática Ambiental (IESPA), *Memorias académicas del Primer Encuentro Investigaciones socioculturales en el marco de la problemática ambiental del territorio*, Pereira, Universidad Tecnológica de Pereira, 2016, pp. 98-129.

²⁴ Pierre Bourdieu, *Sobre el Estado: cursos en el Collège de France (1989-1929)*, Barcelona, Anagrama, 2014.

el municipio de Piedras (Tolima) rechazó el megaproyecto minero de la Anglo Gold Ashanti en 2013.

✦ Tras llevar a cabo una consulta popular en 2014, el municipio de Tauramena (Casare) rechazó el megaproyecto petrolero de Ecopetrol.²⁵

✦ En marzo de 2017, por medio de una acción de tutela, los mineros tradicionales del municipio de Marmato (Caldas) lograron que la Corte Constitucional aprobara la realización de una consulta previa frente al megaproyecto minero de la Gran Colombia Gold Corp.

✦ También en marzo de 2017, mediante una consulta popular, el municipio de Cajamarca (Tolima) rechazó el megaproyecto minero La Colosa de la Anglo Gold Ashanti.

Es así como las comunidades afectadas, con el apoyo de diversos sectores a escala nacional e internacional, han constituido un movimiento social que se articula en torno a la justicia socioambiental y la defensa del territorio. Son movimientos insurgentes contra la acumulación por despojo y la reproducción ampliada del capital,²⁶ como una propuesta local a la glo-

balización de las resistencias que cuestionan las lógicas del neoextractivismo.

Conclusiones

En América Latina y en específico en Colombia el desarrollo neoextractivista expresa continuidades estructurales con el proyecto de colonialidad, despojo territorial, dependencia histórica y creciente reprimarización de las economías. Las contradicciones de este modelo en el siglo XXI no sólo tienen una base social, cultural y ecológica, sino también fundamentos económicos y políticos que sitúan en el centro de la disputa la cuestión del territorio.

Así, un amplio espacio de resistencias desde los movimientos sociales han permitido poner en primer plano las luchas por el territorio, la naturaleza y la cultura desde intereses materiales y simbólicos. Será una tarea de los estudios del desarrollo, desde una perspectiva crítica y basada en la comprensión del contexto, especificar los factores estructurales y los estratégicos del neoextractivismo en América Latina y Colombia para continuar apelando a la reproducción de la vida digna, como lo hacen los movimientos sociales de resistencia. 🐦

Cerrejón, yacimiento de carbón en el departamento de La Guajira, Colombia.

²⁵ Carolina Arias Hurtado, «Conflictos territoriales...», pp. 207-233.

²⁶ David Harvey, *El nuevo imperialismo*, Madrid, Akal, 2004.

